

“Mercados de violencia” y guerra civil en América Latina en los 90*

JAVIER GUERRERO BARÓN
Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC.

* El presente artículo es parte del proyecto “Colombia Violencia y Globalización”, financiado por Colciencias y por el IEPRI–Universidad Nacional, en curso.

RESUMEN

El ensayo es una síntesis de los procesos de articulación de los mercados de violencia entre dos economías de guerra, que se presentaron en América Latina en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado. La forma como los mercados ilegales de armas de las guerras centroamericanas se articularon con las guerras andinas y el papel que el auge del narcotráfico tuvo como combustible en la economías de guerra de Perú y Colombia. El concepto central que se intenta desarrollar es el de mercados de violencia; aplicación de la antropología económica, surgida en el estudio de las guerras africanas.

PALABRAS CLAVE: narcotráfico, economía de guerra, mercado ilegal de armas, violencia.

ABSTRACT

This essay is a brief coupling process about violence markets between two South American war economies. At the last 80's and 90's decades. Likewise, way as weapon illegal markets in central America were articulated with Andean Wars as well as the drug deal role had like a fuel in the Colombian and Peruvian war economies.

The violence market concept is to be developed and the economic anthropology emerged from the African wars study application too.

KEY WORDS: DRUG DEAL, WAR ECONOMY, WEAPON ILLEGAL MARKET, VIOLENCE..

INTRODUCCIÓN

En la posguerra fría ha tomado mucha fuerza el examen de los conflictos armados a la luz de una tendencia que podríamos llamar “la economía política de la guerra”, tendencia que ha hecho énfasis en grandes tesis, como por ejemplo, que los ideales políticos y los grandes proyectos ideológicos han desaparecido y que la gran mayoría de las guerras actuales están conducidas por organizaciones cuyo móvil fundamental es, racionalmente en el sentido weberiano, el beneficio económico. “Señores de la guerra”, “empresarios de la guerra”, son vistos como personajes que ejercen la violencia, disfrazando sus acciones con ideologías y discursos sobre la injusticia, la igualdad, la opresión, la patria, la religión, pero cuya verdadera motivación es la acumulación de riqueza y de poder. Del conjunto de estudios sobre lo que se denominan las “nuevas guerras” se podría deducir que la vieja máxima de Clausewitz “la guerra es la continuación la política por otros medios” ha mutado en “la guerra es la regulación de la economía por otros medios”. Tal vez las guerras siempre han tenido trasfondos y componentes económicos pero nunca habían estado tan a la vista como en las guerras actuales o nunca antes los discursos políticos y académicos habían puesto tanto énfasis en las economías de la guerra.

Esta mirada descarnada desviste de cualquier interés altruista e ideológico a los actores de la guerra presentándolos como hordas de la codicia. No se puede negar que los factores económicos son fundamentales para explicar la “sostenibilidad” y duración de la acción bélica, pero no pasaría de ser un reduccionismo plantearnos un “*homo economicus belli*” para explicar la acción colectiva: la guerra se da en condiciones históricas y es el resultado de contextos complejos donde la economía es un aspecto más, relativizado por otro tipo de motivaciones.

El presente ensayo desarrolla descriptivamente las características generales de un gran bloque de “mercados de violencia”¹ y su relación con “sistemas de Economía de Guerra”² de América Latina: el caso de las guerras de los Andes con su gran epicentro, Colombia y también Perú, algunos de sus antecedentes conectivos en Centroamérica en los años ochenta. Una primera parte hará una corta reflexión sobre el entorno de la “segunda guerra fría”, la segunda “oleada” de guerrillas y la era Reagan con las circunstancias que hicieron del narcotráfico el combustible de la guerra y los factores intervinientes que en la década anterior a 1990 activaron y articularon dichos mercados suramericanos con las guerras centroamericanas.

La pregunta central es, dentro del proceso histórico, cómo las guerras de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se articularon con las de Colombia, Perú.

GLOBALIZACIÓN, Y GUERRA CIVIL EN LOS 90

Después del derrumbe del Muro de Berlín y la caída de la URSS, en América Latina rápidamente se descongelaron los bloques de la Guerra Fría y la redefinición mundial que sobrevino tuvo repercusiones casi

inmediatas sobre los sistemas de guerra, creándose en el caso de las guerras centroamericanas, una excepcional coyuntura favorable para un rápido proceso de paz, especialmente en Guatemala y El Salvador pero con repercusiones en toda el área, en países con conflictos sociales y políticos agudos como Honduras y Nicaragua³.

Estas repercusiones que en el caso mencionado de Centroamérica o en conflictos como el de Sudáfrica, fueron positivas y distensionantes —y así lo reconocen los principales estudiosos para cada uno de los casos— paradójicamente en el complejo nudo gordiano de las dos guerras suramericanas de Perú y Colombia el efecto fue contrario. En el caso de Colombia, una de las guerras más antiguas del planeta, considerada como típico conflicto de la posguerra mundial por el alineamiento de las fuerzas políticas y militares con cada uno de los campos del mundo bipolar y en el caso peruano un proceso similar de guerrillas no consolidadas en los sesenta y setenta que se consolidan en los 80 pero sin el grado de inserción y desarrollo de las guerrillas “históricas” del primer caso.

En ambos países habían emergido guerrillas que desde los sesenta habían sido

1 El concepto es trabajado por ELWERT, George. «Markets of Violence», in G. Elwert *et al.* (dir.), *Dynamics of Violence: Processes of Escalation and Deescalation in Violent Group Conflicts*, Berlin, Duncker & Humblot, p. 85-102.

2 Retomamos a Nazih Richiani en su artículo “Between Sustainable Development and War Economies: Paradoxes of Capitalist Development”. Mimeo.

3 Es la principal conclusión de una reunión de trabajo del IEPRI con el investigador francés Frédéric Massé, Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo -UAED- Bogotá, sobre su tesis en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos (IHEAL), sobre el papel de las Naciones Unidas en el proceso de paz en El Salvador. Bogotá, junio de 2002. Ver también del mismo Massé: “De la Violencia a lo Político, ¿Una Reconversión Lograda? El Caso Del Salvador”. En: *Análisis Político*, Bogotá, N° 36, enero-abril de 1999.

vistas con indiferencia y que se desarrollaron en los ochenta pero una vez sobrevino el derrumbe del Muro de Berlín, por contraste con el caso centroamericano, las nuevas circunstancias reforzaron los conflictos y aceleraron los procesos económicos y políticos alrededor de la guerra. El estallido de la globalización reforzó, fortaleció y ayudó a consolidar los sistemas de economías de guerra. Uno de ellos —el peruano— se resolvió militarmente, en tanto que en Colombia está más lejos de su resolución. Algo similar sucede actualmente con las guerras del petróleo en Asia o con las guerras del petróleo, el oro y los diamantes en África, como bien lo desarrolla el artículo de Martín Kalulambbi en un libro próximo a aparecer⁴.

Uno de los factores decisivos que podría explicar esta aceleración del conflicto es el entreveramiento entre la guerra antidrogas, dominante en la política mundial, con los movimientos insurgentes o contra insurgentes. La mezcla de los recursos de la coca con el fundamentalismo maoísta de Sendero Luminoso y con el movimiento de las “rondas campesinas” y los Comités de Defensa Civil, CDC, en Perú o con las estructuras militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC) y ELN, y la unificación de un ejército paramilitar de extrema derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia–AUC, elevaron hasta el límite los niveles de la confrontación.

Pero matizando en el caso colombiano, hubo el mismo “efecto centroamericano”

pero de manera ambigua. Es decir, también se dio el efecto distensionante parcialmente, situación que ha sido invisibilizada por el crecimiento de las dos grandes guerrillas mayores: en un también rápido e inesperado proceso de paz los movimientos 19 de abril (M-19), una fracción mayoritaria del Ejército Popular de Liberación, (EPL), de orientación maoísta, una disidencia del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, se acogieron a un proceso de paz, que se dio alrededor de una importante reforma política realizada en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente que realizó la más destacable apertura democrática que haya vivido este país desde 1886, cuando se aprobó una constitución centralista, conservadora y clerical. La Constituyente de 1991 fue diseñada como un gran proceso de paz en medio de una gran crisis en la que el Cartel de Medellín lanzó la más grande ofensiva terrorista contra el tratado de extradición, que comenzó primero contra el poder judicial y la prensa y terminó en el asesinato de tres candidatos a la Presidencia, entre ellos el virtual presidente y candidato oficial del partido mayoritario, el liberal y carismático Luis Carlos Galán Sarmiento. La estrategia incluyente fracasó en gran parte porque el mismo día que se elegía a la Asamblea Nacional Constituyente, el Ejército Colombiano en un aparatoso y publicitado operativo asaltó la zona desmilitarizada concedida a las FARC desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) para adelantar un proceso de paz⁵.

4 KALULAMBI, Martín. (comp.) *Perspectivas Comparadas de Mercados de Violencia*. Bogotá, Universidad Nacional, Mimeo.

5 Pocos estudios se han hecho sobre este conjunto de procesos de los ochenta y su culminación en la Constituyente. Sobre los casos de desmovilización de las guerrillas menores, el más importante es PEÑARANDA, Ricardo y GUERRERO, J. Ed. *De las Armas a la Política*. Bogotá Tercer Mundo–IEPRI, 1999.

Es decir, la globalización actuó sobre las “formaciones sociales en guerra” de manera diversa y contradictoria según el caso. Allí donde se articularon economías de guerra y mercados de violencia, consolidados los conflictos, se hicieron de muy difícil solución o se agudizaron y en algunos casos constituyeron verdaderas situaciones de “statu quo” donde la violencia es el elemento articulador de un orden estable de dinámicas de guerra en equilibrio.

Tal vez ese sea el caso de Colombia. Varios factores explican esa continuidad y excepcionalidad, pero casi todos los analistas coinciden en buscar la explicación en la presencia de varias economías ilegales que se han articulado complejamente y donde la matriz de todos los canales mercantiles están atravesados por el mercado mundial de la cocaína, (y de sus colaterales la marihuana y otras drogas psicoactivas como las opiáceas derivadas de la amapola, especialmente la morfina y la heroína), articulados estrechamente al mercado de armas, de precursores químicos, y sus necesarias asociaciones de corrupción de autoridades, lógicas que conducen y condicionan los intereses de los actores de la guerra.

LA SEGUNDA OLA DE LA GUERRA FRÍA

Un primer ciclo de guerrillas se dio a partir de la Revolución cubana en los años sesenta, cuando en muchos países surgieron movimientos armados inspirados en ella. No obstante, ninguna de ellas triunfó. El segundo ciclo que influyó en las guerrillas y contraguerrillas latinoamericanas lo animaría el triunfo Sandinista en Nicaragua en 1979, que únicamente tendría cierto efecto en la reactivación de las ya existentes, desde

los 60 y 70, luego de una oleada de dictaduras militares y gobiernos autoritarios que desalentó y desactivó el efecto expansivo izquierdista de los años 60, si es que se puede hablar de esas macro influencias a nivel continental. Pero en esta ocasión narcotráfico y guerra contrainsurgente se mezclaron irreversiblemente, como los desarrollaremos en la segunda parte.

Así, en la segunda «oleada» de expansión de las guerrillas en los años 80 se consolidaron dos sistemas de guerra; la Revolución Sandinista animó al sector conservador de los Estados Unidos y de toda América Latina a diseñar estrategias de contrainsurgencia a partir de modelos de guerra «de baja intensidad» que formarían dos sistemas de economías de guerra que articularon a su vez varios mercados de violencia focalizados en Centroamérica y en Suramérica. Todo ello inventado por la dialéctica ascendente de una de las etapas más dinámicas de la guerra fría.

«EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO» Y LA ERA REAGAN

La era Reagan crea un contexto político militar en el mundo y en América Latina favorable a la agudización de algunos conflictos, privilegiando los aspectos políticos y desatendiendo o permitiendo que se desarrollen otros. Es el caso de las drogas. El tono de la guerra fría se agudiza en cuanto tiene que ver con Cuba, Nicaragua y las diferentes guerrillas, pero algunos temas referentes al narcotráfico reciben un tratamiento o bien supeditado a las necesidades de la guerra anticomunista o mediante políticas permisivas, o más que eso, alianzas ocultas, situaciones todas ellas aprovechadas por las organizaciones criminales que

obtuvieron un crecimiento sin precedentes hasta esos años.

El triunfo de la revolución Sandinista creó un nuevo marco expansivo a las guerrillas latinoamericanas, pero especialmente a las de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto hizo que E.U. iniciara una ofensiva contra el gobierno Sandinista y la contención de una eventual expansión de la revolución triunfante. Era el retorno del fantasma de lo que para el sureste asiático se nombraba como “el efecto dominó” y que justificó las intervenciones en Vietnam, Laos y Camboya. Luego del gobierno de Jimmy Carter a quien acusaron de debilidad, tanto en la crisis de los rehenes en Irán, el tratado de devolución de la Zona del Canal a Panamá, el retiro de tropas de Corea del Sur, restablecimiento de relaciones diplomáticas con China y acuerdo para la limitación de armas estratégicas SALT II con la URSS, producto de una política exterior demócrata basada en la construcción de consensos, el uso limitado de la fuerza y el respeto por el derecho internacional. Además, el Presidente anunció que los derechos humanos y la transparencia regirían las relaciones internacionales. Todo ello era visto como debilidad. Pero lo que se veía como imperdonable fue permitir el triunfo Sandinista que se sumaba al triunfo de la revolución Islámica en Irán, a la humillación sufrida por la toma de la embajada por las milicias islámicas del Ayatola Homeini y aún peor, el fracaso total de la operación comando para su rescate en abril de 1980 y un nuevo asalto a la embajada en Libia. Como si fuera poco, la URSS invadió a Afganistán en diciembre de 1979 en apoyo del débil partido marxista que gobernaba

luego del asesinato del Presidente Amín, por el temor a una nueva revolución islámica en sus fronteras, entre otros motivos⁶.

De todos esos sucesos el problema grave para E.U. era Nicaragua. Para la política Carter era impresentable un apoyo militar para sostener en el poder al debilitado dictador corrupto, criminal y continuador de la dinastía impuesta en los años 20 por la United Fruit, Anastasio Somoza jr. Los analistas explican la situación de dos maneras: el gobierno de Somoza era insostenible, los Sandinistas avanzaban desde 1962 inatajables. Pero las derechas de toda América aducían que Carter no hizo lo suficiente para detener el triunfo de la “cabeza de playa” de Cuba y la URSS en el continente mismo “a solo unos kilómetros del Canal de Panamá”. Es así como la opinión estadounidense dio un fuerte giro a la derecha eligiendo a Ronald Reagan en noviembre de 1980 iniciando una nueva etapa de la guerra fría. El triunfo electoral de un personaje formado en las agrias disertaciones del “macartismo” en los 50, quien como presidente del Sindicato de Actores de Hollywood había elaborado la lista de intelectuales, escritores, guionistas, actores, y directores acusados de comunistas, para la Comisión Antiamericana que presidía el nefasto senador, Joseph McCarthy, abriría la Caja de Pandora.

El discurso radical de Reagan tuvo en la URSS como contrafuerte la llegada al poder de un mandatario en el ocaso de su senectud y atacado de paranoia, Yuri Andropoy, de 78 años, quien permaneció en el poder unos pocos meses y falleció en 1984. Ambos a su manera, agudizarían las contradicciones

6 VEIGA; Francisco y otros. La paz simulada: una historia de la Guerra Fría, 1941-1991. Madrid, Alianza, 1997.

de la segunda guerra fría. En América la Administración Reagan ordenó en 1983 la invasión de la República de Grenada acusada de ser una base militar de la URSS. Ya desde 1981 había declarado la guerra al gobierno triunfante de Nicaragua, mediante medios ilegales, con el minado de los puertos y atacando desde Honduras y Costa Rica apoyó a un ejército disidente «la Contra», así mismo inició inyecciones de capital con precedentes a la guerra salvadoreña que había estallado simultáneamente con el triunfo de los rebeldes nicaragüenses, la que a su vez tendría repercusiones en Honduras y Guatemala.

Guatemala junto con Filipinas y Colombia, tenían en los 80 las guerrillas más antiguas del mundo, (para no mencionar al conflicto Palestino-Israelí, por sus profundas diferencias de texturas culturales, étnicas y religiosas), países donde las guerrillas se consolidaron sin acceso al poder, en lo que los analistas denominaron «insurgencia crónica» o “insurgencia sin revolución”⁷. Centroamérica tenía como situación particular el hecho de la cercanía geográfica de las dos únicas revoluciones triunfantes, Cuba y Nicaragua, y de países con guerrillas crónicas, Honduras, Guatemala y recientemente El Salvador. En todos ellos los motores detonantes fueron las restricciones del régimen político y el problema agrario.

Sin excepción, después de la muerte del «Che» y del fracaso de las guerrillas bolivianas todas las posteriores nacen y las existentes a nivel rural derivan hacia la estrategia de la «Guerra Popular Prolongada» con miras a una «insurrección popular». Esa fue la inspiración, por ejemplo, del frente

«Farabundo Martí» que surge inmediatamente después del triunfo Sandinista y que fue la guerrilla que mayor arraigo popular alcanzó, así como el acercamiento a un modelo de «Guerra Civil» propiamente dicho, por el alineamiento de altos porcentajes de la población, tanto que es considerada en la posguerra mundial como la de mayor intensidad después de la de Vietnam.

Lo que pasaba en Centroamérica no tenía mayor conexión con lo que sucedía en Suramérica. Además del impacto político del auge guerrillero, los circuitos de la guerra centroamericana no tenían más conectores que los normales: apoyo cubano, cuya economía cada vez era más dependiente, respaldo retórico y moral de la URSS, que para entonces tenía muchos problemas en su entorno asiático para poder atender a los frentes de ultramar, gran crisis económica por los precios del petróleo y del aumento de los intereses y el capital de la deuda externa de muchos países de la región. El Presidente Belisario Betancur de Colombia, Alan García en el Perú y Enrique Roldós en Ecuador, trataron de enfrentar la crisis de la deuda externa creando un club de deudores después de que la economía mexicana estuviera al borde del colapso en 1982. América Latina estaba en total ebullición, mientras el Presidente Reagan invadía a la minúscula República de Grenada, en el Caribe.

En los ochenta todo parece acelerar los acontecimientos y la violencia es un fenómeno extendido sobre la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Los países que mantenían guerrillas pasan a estados

7 PIZARRO, E. Op. cit.

de guerra abierta. Las principales organizaciones armadas crecían como nunca antes: el clima de la guerra fría se expresaba a través de numerosos conflictos de “baja intensidad” hasta la articulación de verdaderos sistemas de guerra. El incendio centroamericano se tornó incontenible y en Suramérica las guerrillas colombianas y peruanas tomaron dimensiones como nunca antes en Suramérica.

La pregunta es ¿Qué factores hicieron sostenible este sistema de guerra? y cómo se articuló con el circuito de guerras suramericano, especialmente Perú y Colombia? No cabe duda que hay tres telones de fondo comunes: la fase «Reagan» de la guerra fría y la guerra contra el narcotráfico y las conexiones con los mercados ilegales que estas guerras tuvieron, hasta articularlos en grandes circuitos o «macro-mercados» mundiales de violencia que a su vez han involucrado mercados legales.

Los vasos comunicantes entre una zona y otra son muy importantes para explicar las dinámicas militares.

“CONTRA” Y NARCOTRÁFICO

El triunfo sandinista replanteó la política continental. El gobierno de Reagan que recientemente comenzaba llegaba con un discurso que se apoyaba en tradiciones intransigentes. Lo primero que hizo fue

lanzar una cruzada contra la URSS sede mundial del “imperio del mal” y “foco de todo mal”⁸.

En 1981 Ronald Reagan declaró la guerra a los sandinistas, de manera frontal, reformulando toda la estrategia de seguridad para la región. Como se ha dicho, Estados Unidos no iba a tolerar una segunda Cuba. En 1982 la CIA ordenó minar los puertos nicaragüenses, pero la opinión estadounidense no estaba dispuesta a enfrentar otra guerra como la de Vietnam. El 10 de octubre de 1984 el Senado de mayoría demócrata mediante la «Enmienda Boland» le prohibió a Reagan cualquier intervención directa o «indirecta» en Nicaragua, desautorizando a la guerrilla antisandinista conocida como la «contra», la Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN. Sin embargo, los hombres del Presidente, siguieron con el plan militar y financiero que los obligó a buscar recursos extraordinarios. Para ellos se elaboró un complejo plan que solucionaba dos frentes estratégicos: Derrocar al gobierno sandinista y solucionar algunos problemas en Irán y Líbano con las guerrillas islámicas. Inicialmente, se hizo tráfico de armas a las milicias islámicas moderadas a cambio de la libertad de los rehenes estadounidenses en ese momento retenidos en Líbano. Así, en 1984 se inició una de las operaciones que dan origen a la «Dark Alliance»⁹ denunciada ampliamente en el informe de la «Comisión Kerry» que integró el Senado de los Estados Unidos

8 Nótese la semejanza de la política de E.U. después del 11 de septiembre, luego de las torres gemelas por parte de George Bush. En su momento Ronald Reagan manifestó: “[La Unión Soviética tiene los impulsos de un imperio del mal ...[y es] el foco de todo mal”. Discurso de 8 de marzo de 1983.

9 “Alianza Oscura” es el título de uno de los más interesantes libros sobre la alianza entre la CIA y la “Contra”. Gary Webb desde el periódico San José Mercury News, de California documentó ampliamente cómo en el área de la Bahía de San Francisco, la CIA organizó un grupo de narcotraficantes para que vendiera cocaína a las pandillas del centro-sur de los

conocida también como la “Comisión del Crimen”¹⁰. Allí se demostró que la operación encubierta involucró a numerosos traficantes israelíes, oficiales del ejército Hondureño, agentes de la CIA, así como colaboradores directos en la Casa Blanca del Vicepresidente George Bush, quien tenía a su cargo la Secretaria de Estado para asuntos de Seguridad, así como el asistente del Vicepresidente y del Secretario de Estado, Oliver North, de quien dice el periódico **Washington Post** en un documentado informe sobre sus nexos con el «narcotráfico que una aeronave fue detenida en el aeropuerto de San Andrés [Colombia], luego de haber participado en transporte de cocaína, lo anormal era que se trataba de una aeronave tipo DC - 4 perteneciente al National Security Council de la Casa Blanca que estaba a cargo de North”¹¹.

LA CONEXIÓN COLOMBIANA Y EL SURGIMIENTO DE LA GRAN INDUSTRIA

Aunque esta historia parece sacada de un fantástico “complot” con los que las historias de la guerra fría atribuían mutuamente a la KGB y a la CIA para alimentar morbosamente sus imaginarios,

cada vez que los historiadores de la guerra conocen más sobre este episodio, que parece estar lejos de la fantasía, por la calidad de los documentos y testimonios que se han revelado, el asunto produce más perplejidad. Y aunque estos hechos en sí mismo tampoco “lo explican todo” ni es la “causa de todos los males de América Latina”, si permiten un mejor análisis de cómo se activaron los mercados de violencia en los dos sistemas de guerra, por lo menos desde el punto de vista de la “economía política de la guerra”.

No aparecía nada nuevo. Tal parece que las “alianzas” de North y de la contra, simplemente producían desplazamientos en el negocio, si nos atenemos a las informaciones de una historiadora:

“...el caso de varios países latinoamericanos comprueba...que el tráfico de drogas nunca está ajeno al ‘tráfico de o influencias o de poder formal’. En México la marihuana provocó un aumento cualitativo notorio de los niveles de corrupción administrativa, policiva, militar y gubernamental. Igual pasa en Venezuela y Ecuador, donde numerosos congresistas y

Angeles, con el objetivo de financiar la compra de armas para la Fuerza Democrática Nicaragüense, conocida comunmente como la «contra». Como si eso fuera poco, el jefe de las pandillas convirtió la cocaína pura en crack, mucho más adictivo y barato y lo comercializó al por mayor a distribuidores de todo el país, con lo que contribuyó en forma muy eficiente a diseminar una forma mortal de drogadicción entre la población negra. WEBB, Gary. *Dark Alliance. The CIA, the Contras and the Crack Cocaine Explosion*, Nueva York, Seven Stories Press, 1998.

10 “Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations of the Committee on Foreign Relations, US Senate, Drugs, Law Enforcement, and Foreign Policy”, US Printing Office, Washington, 1989.

11 La noticia fue reproducida por el diario “El Espectador”, Bogotá, martes 25 de octubre de 1994.

“Mercados de violencia” y guerra civil en América Latina en los 90

Javier Guerrero Barón

altos mandos militares son sindicados y, a veces, procesados por sus relaciones con el tráfico de cocaína”¹².

ajeno a los “señores de Santacruz, y que los generales institucionalizaron, internamente el tráfico”¹³.

El mercado de las drogas ilegales y la marihuana, como lo muestra ese estudio estaba diseminado por varios países. La característica era que no existía un monopolio de ninguna de las etapas pero el camino hacia los grandes productores lo estaba garantizando el crecimiento del consumo. Pero muy pronto el problema de “seguridad nacional” y la lucha antidrogas se uniría. El primer caso explícito fue el argentino y le siguen el paraguay y el boliviano:

En Argentina, la tristemente célebre AAA fue creada por un ministro de Bienestar Social con dineros de la lucha antinarco tráfico entregados por Estados Unidos. Años antes, el golpe de Estado contra Isabel Perón había destapado las vinculaciones entre altos funcionarios (hasta ministros), la extrema derecha y el tráfico. Paraguay tiene asegurada su fama de paraíso de traficantes y de nazis. El control del tráfico está en manos del viejo dictador Strossner, su hijo y un general que ponen a disposición de los exportadores de cocaína, heroína, marihuana y contrabando diverso, no menos de 800 aeropuertos privados. Finalmente, Bolivia, fue el caso más relevante en cuanto ninguno de los golpes de estado de los últimos años fue

Entonces el tráfico no era nuevo; la nueva situación se daba, primero en cuanto surgiría un monopolio de todas las etapas del procesamiento y comercialización que coincide con cambios en el mercado de consumo, con el tránsito del mercado dominante de la cannabis al mercado dominante de la cocaína, que por tener mayor valor agregado y mayor valor por unidad de peso (kilogramo) garantizaba mayores ganancias. La segunda novedad radicaba en un hecho fundamental, conectado con el anterior: se habían cerrado los circuitos entre los dos grandes sistemas de guerra del continente. La conexión necesaria entre los dos grandes mercados se había hecho de manera perfecta, conectando los circuitos mercantiles más importantes que otorgaban las oportunidades fundamentales para el desarrollo de cada una de las guerras: drogas y armas. Estos dos circuitos traerían por añadidura a los demás componentes colaterales de un mercado mucho más amplio que contribuiría a ampliar los mercados ilegales y articularlos a estrategias de contrainsurgencia, como en el caso del proyecto, de la “Contra” centroamericana y en el caso particular de del surgimiento de un proyecto paramilitar que años más tarde, en los 90, derivaría en el caso colombiano, hacia las Autodefensas Unidas de Colombia, y en el Perú fortalecería los organismos de defensa civil en algunas regiones cocaleras, eso en

12 SAULROY, Milene. Historia del Narcotráfico Colombiano a través de sus relaciones con el poder. En: Ortiz, Carlos M. Memorias del Quinto Congreso de Historia. Armenia, ICFES-Universidad del Quindío, 1985, p. 524.

13 Ibidem.

el campo de la contrainsurgencia. Del otro lado, el de la insurgencia, o mejor, el de los ejércitos guerrilleros, si no directamente en un principio, la cocaína y la amapola crearían auges económicos agrarios en los países productores que directa o indirectamente fortalecerían a las guerrillas existentes y posibilitarían los recursos para el sostenimiento de estrategias de corto plazo, en Perú con la urbanización de la guerra, y de mediano y largo plazo, como en el caso colombiano de las FARC con la expansión de sus hombres y frentes. Eran efectos colaterales inevitables.

Pero volvamos a la narcoindustria que estaba surgiendo y la conclusión que surge de la información disponible, derivada del informe Kerry y los estudios posteriores¹⁴. En primer lugar, las consecuencias obvias, tuvieron mucho que ver con el aumento de la capacidad de producción de los carteles. La cocaína en grandes volúmenes era parte de una operación continuada que duró al menos dos años en convenio con el cartel de Medellín, en la que los narcotraficantes colombianos obtuvieron importantes ventajas e inmunidad para muchas de sus operaciones en las que estuvo involucrado como intermediario el General y Presidente de Panamá Carlos Augusto Noriega luego enjuiciado y extraditado por estos y otros hechos similares¹⁵.

La importancia cualitativa de este proceso, en términos de economía política,

es el surgimiento y consolidación de un monopolio que compraba la coca en Bolivia y Perú, la procesaba en Colombia y la transportaba a través de México, Centroamérica y el Caribe, y que además mercadeaba al por mayor y por menor en las calles de las distintas ciudades.

Pero lo importante de este proceso es que Colombia exportaba a los Estados Unidos en 1973 tan sólo seis toneladas de cocaína. En 1981 antes de la operación encubierta se le atribuían cincuenta toneladas. En 1986 al final de la operación, Colombia exportaba 150 toneladas y, posteriormente, un solo un laboratorio, «Tranquilandia» capturado en los llanos del Yarí y cuya propiedad se le atribuye a la sociedad de Pablo Escobar con el mencionado General Noriega, tenía capacidad de procesar en pocos meses 300 toneladas, si tuviera disponible la materia prima, pasta básica de coca, traída desde Bolivia y Perú. Colombia había dejado atrás la etapa artesanal para entrar en la era de la «Gran Industria». Además, las dificultades para asegurar la materia prima y aumentar ganancias, obligaba, a “sembrar” en cantidades crecientes desde entonces¹⁶.

LAS CONSECUENCIAS

Pero, ¿qué consecuencias tendría este hecho a nivel continental? Las consecuencias no quedarían únicamente en los hechos centroamericanos. En el plano

14 Nos referimos a los relacionados en la nota N° 8.

15 SAULOY, Mylène y LE BONIEC, Yves., Op cit.

16 Otros estudios se han ocupado del caso: SMITH, Peter H, comp. El Combate a las Drogas en América. México, FCE, 1993, en esta compilación se destaca el trabajo de Gugliotta, G., “Los carteles Colombianos y como detenerlos”. GUGLIOTTA, Guy y LEEN, Jeff. Kings of cocaine: inside the Medellín Cartel, an astonishing true story of murder, money, and international corruption. New York: Simon and Schuster, 1989 (Other edition

político, el narcotráfico era un poder creciente. En Bolivia el General Luis García Meza, (1980-81) era el primer presidente de los tratantes, y las mafias eran la industria más próspera de esos años en la zona andina. Antes, en 1978 un familiar cercano del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala¹⁷ había sido señalado como traficante, hechos que demostraban tres cosas: que la expansión del negocio era inatajable, que la “Guerra antidrogas” aumentaba su importancia estratégica para el Departamento de Estado, que como estrategia mostró rápidamente una alta efectividad para presionar gobiernos y hacerlos obsecuentes, so pena de tildar al gobernante de mafioso. El método sirvió desde García Meza hasta Samper, pasando por Noriega.

En cuanto a la economía, pronto surgiría un obstáculo: el mercado tenía un límite. El aumento de los grandes embarques no crecía al mismo ritmo del consumo. Y los minoristas se veían ante dos grandes problemas: ensanchar el mercado antes que el aumento de la oferta afectara en materia grave los precios por efecto del aumento de la oferta. Y eso fue lo que hicieron los minoristas de la contra: incorporar a nuevos consumidores a sus redes minoristas. Lo que pasaba en San Francisco, donde los agentes de la “contra” «inventaron el crack» para vender las toneladas excedentes de cocaína a los latinos, a bajo costo, porque el mercado estaba totalmente saturado¹⁸.

Las lógicas económicas del negocio, así estuvieran en ascenso, no podían por sí mismas explicar un inesperado crecimiento hasta tener la capacidad de copar el mercado estadounidense y de desplazar a otras mafias tan o más poderosas, incluidas las tradicionales mafias estadounidenses, en la distribución minorista. Fueron entonces todos factores “extraeconómicos” los que abrieron la catarata de dólares sobre las organizaciones colombianas y sobre la economía de este país:

«...El aumento del poder del primero de los carteles colombianos de la cocaína –el de Medellín– entre 1984 y 1986 le debe mucho al hecho de que compartió con la Contra una red clandestina de distribución. Opinión común de antiguos diplomáticos norteamericanos, de investigadores del Congreso y de oficiales latinoamericanos consultados por el diario británico *The Independent*. «Creando el sistema de abastecimiento de los contras, los Estados Unidos abrieron una vía de acceso de la droga a los Estados Unidos», precisa Mc Michael, el oficial que renunció a la CIA... Los dirigentes del país veían en el comunismo la suprema amenaza de la especie humana. Mientras todos sus esfuerzos políticos se concentraban en los sandinistas, el precio de la cocaína

s.l. Harper, 1990). SCOTT, P.D. y MARSHALL, J. *Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America*, University of California Press, Berkeley, 1998. COCKBURN, Alexander, ST. CLAIR, Jeffrey; *Whiteout. The CIA, Drugs and the Press*, Londres/Nueva York, Verso, 1998. CLAWSON, Patrick L. & LEE III, Rensselaer W.; *The Andean Cocaine Industry*, Houndsmills, Macmillan, 1996.

17 SAULOY, Historia... Op cit.

18 WEBB, Gary. Op cit.

en los Estados Unidos caía de 60.000 a 10.000 dólares el kilo. Sin esta caída de los precios el crack nunca hubiera sido una droga barata en la calle.»¹⁹

Esta declaración de un experto confirma:
1- El involucramiento de “canales oficiales de apoyo”. 2- La construcción del monopolio de los carteles colombianos. 3- La crisis de superproducción y su impacto en los precios. 4- La ampliación del mercado por la vía del sub-producto crack, dirigido hacia los sectores más pobres de las principales ciudades estadounidenses.

Obviamente, este crecimiento repercutía en las selvas de Bolivia, Perú y Colombia.

EL MERCADO DE ARMAS

Crisis semejante tenía el otro mercado paralelo. Los grandes traficantes, las mafias en Guatemala y Honduras estaban preocupadas porque habían acumulado altos inventarios de armamentos pesados y livianos como nunca antes en la historia del mercado negro, para surtir la demanda de las guerras centroamericanas y empezaban a exportar a Suramérica. Desde la bonanza “marimbera” de los años setenta cuando en la Guajira colombiana los aviones llegaban cargados de toneladas de armas y se iban cargados con las “pacas” de marihuana prensada, ahora también el negocio era de ida y vuelta: venían cargados

de armas y municiones y regresaban cargados de paquetes de a kilo de cocaína pero la nueva bonanza no llegaba sola: atizaría las relaciones violentas como nunca antes. Aunque es un mercado sobre el que existe menos información disponible, existen los suficientes indicios para demostrar que el mercado de armas ha crecido paralelamente con el de drogas y que muchos de los grandes traficantes del Caribe están directa o indirectamente relacionados con el de drogas²⁰. Sin embargo, es poco lo que podemos precisar en el actual estado de la investigación.

¿POR QUÉ COLOMBIA Y PERÚ?

Perú y Colombia eran los únicos países suramericanos que reunían las siguientes pre-condiciones²¹:

- Existencias de guerrillas larvadas o crónicas.
- Mercados ilegales de productos derivados de la coca.
- Circuitos ilegales de tráfico permanente de armas y de material bélico.
- Tolerancia social a las actividades del narcotráfico y de otros mercados ilegales.
- Enlaces entre autoridades estatales y las organizaciones ilegales para la contención contrainsurgente militar o simplemente como circuitos de corrupción.

19 SAULOY, Mylène y LE BONIEC, Yves. Op cit. p. 193. Los autores citan el artículo «America has fought the wrong war» (America ha luchado una guerra equivocada), en: **The Independent**, 26 de agosto de 1989.

20 TOKATLIAN, Juan G. y RAMÍREZ, José Luis, ed. La Violencia de las Armas en Colombia. Fundación Ángel Escobar, 1995.

21 THOUMI ha desarrollado este tema en sus dos principales libros.

- ❑ Grandes oleadas de inconformidad y malestar rural y urbano, movimientos campesinos e indígenas con situaciones de inequidad estructural.
- ❑ Fracaso (Colombia) o exclusión de sectores campesinos (Perú) de las reformas agrarias.
- ❑ Zonas marginadas del mercado nacional, sin políticas de fomento agrícola y sin control ni presencia estatal.
- ❑ Políticas y acciones de seguridad inadecuadas y alta ineficiencia de los organismos de seguridad.
- ❑ Gran debilidad y baja legitimidad institucional. (Más Colombia que Perú).
- ❑ Regímenes autoritarios, o regímenes democráticos pero percibidos por actores de oposición como de “democracia restringida” excluyente sin garantías de participación de sectores importantes de la sociedad. (Más Perú que Colombia).

De estas, las seis primeras son determinantes, las otras coadyuvantes. Coincidentalmente son similares a las que vivieron los países centroamericanos en guerra en los 80. Pero Colombia tenía un agravante: el narcotráfico y las armas no eran las únicas economías ilegales: las guerrillas y los paramilitares se pelean a muerte los recursos de otras economías ilegales de otras mafias que se articulan a un gran mercado de violencia que constituye un gran negocio,

tales como el mercado de hidrocarburos hurtados a los oleoductos o el tráfico de oro y piedras preciosas, que aunque no es ilegal se articula con los mercados ilegales.

A continuación señalaremos algunas particularidades de estos dos casos de economías de guerra.

PERÚ: EL SENDERO DE LOS ANDES

En los Andes Peruanos, en Ayacucho, entre 1983 y 1984, años en que se intensificó la demanda de pasta de coca, hubo un verdadero genocidio, pues en dos años murieron 4.858 habitantes de la Provincia de Ayacucho casi uno por cada 100. En 13 años 1980 - 1993, hubo en promedio dos por cada 100. Es decir, que si una violencia similar azotara a todo Perú, morirían 450.000 peruanos. Muchos otros huyeron de la región. La Provincia de Huamanga perdió por muerte o migración el 23.3% de su población rural²². El aumento de la demanda de la coca y la elaboración de pasta básica coincidió con el auge de Sendero Luminoso, que pudo aumentar sus impuestos sobre los campesinos que quedaron atrapados entre dos campos de brutalidad violenta: la del fundamentalismo de Sendero Luminoso y la de unas Fuerzas Armadas sin normas, ni ley que masacraban sin piedad y hacían fosas comunes, quitándole el agua al pez. Entre 1988-1991 Perú pasó a ocupar durante 4 años consecutivos el primer lugar en el mundo por la cifra de detenidos desaparecidos²³.

22 DE GREGORI, Carlos Iván. “Ayacucho Después de la Violencia” En: De Gregori y otros. Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso. Lima, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamango, 1996.

23 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, IDL. Perú Hoy. En el oscuro sendero de la guerra. Lima, 1992; p. 34.

Es indudablemente que la demanda de coca y de pasta básica generada por el “nuevo mercado inducido” políticamente para la guerra de contrainsurgencia en Centroamérica activaba mercados de violencia presentes en Perú y Colombia.

Los analistas más destacados explican el desarrollo de la industria de las drogas en Perú por una combinación de circunstancias y ventajas comparativas. Especialmente,

«...como efecto de la significativa demanda externa de derivados de la coca y la ventaja comparativa de producir coca en ese país, combinados para generar una expansión masiva en la exportación de dichos derivados. En suma estos dos factores recibieron la ayuda de las siguientes condiciones: 1) los bajos niveles de ingresos en los Andes y las grandes ganancias asociadas con la producción de coca o cocaína, 2) la corrupción institucional; 3) la pérdida gradual de los mercados urbanos de alimentos [por preferencia de los consumidores por productos manufacturados «modernos» o importados; 4) la exclusión efectiva de los campesinos andinos del programa de Reforma Agraria de 1969 ; 5) el bajo lucro de la actividad agrícola; 6) la ineficacia del gobierno en atender a

los productores agrícolas de la selva y 7) un cambio de patria en la migración interna”²⁴.

Otros estudios asocian también las circunstancias que aumentaron el cultivo de la coca con «la crisis de la deuda externa peruana de principios y mediados de los ochenta y el mal manejo macroeconómico durante el gobierno de Alan García con la expansión de la coca en el Alto Huallaga»²⁵.

Un conjunto de circunstancias, pues, hicieron que Perú y Colombia formaran y consolidaran mercados de violencia asociados a Economías de Guerra. Pero cronológicamente, al menos un factor fue detonante: el aumento intempestivo de la demanda de los bienes ilegales que activaron dos circuitos: tráfico de armas y tráfico de cocaína.

Perú, como Colombia y como casi toda América Latina, había tenido experiencias de guerrillas izquierdistas en los años sesenta. Raúl Haya de la Torre, el mítico líder del APRA fue elegido Presidente de Perú en 1962, pero el ejército dio por dudosos los resultados de los comicios y forzó la elección de Fernando Balaúnde Terry, candidato del partido conservador “Acción Popular”. Un sector del APRA, en la ilegalidad, organizó la lucha guerrillera y campesina.

24 El estudio más reciente THOUMI, Francisco. El Imperio de las Drogas: Narcotráfico, Economía y Sociedad en los Andes. Bogotá, IEPRI-Planeta, 2002, p. 62, Apoyado en ÁLVAREZ, Helena y CERVANTES, Joel. “The Economic Consequences in de ‘Peruvian Disease’” In: GONZÁLEZ DE OLARTE, E. The Peruvian Economy and Structural Adjustment: Past, Present and Future. Coral Gables, North Center Press, University of Miami, 1996.

25 COTER, Julio. Drogas y Política en el Perú. Lima, IEP, 1999. SMITH, Peter, THOUMI, Op cit, p. 73.

En 1968 el sector más progresista del ejército protagonizó un nuevo golpe de Estado, que llevó al poder al General Juan Velasco Alvarado, quien nacionalizó el petróleo y emprendió la reforma agraria. En 1975, por rotación, el poder pasó al general Morales Bermúdez, que dio un giro a la derecha; la nueva situación provocó disturbios populares en Lima y Arequipa (1976-1978). En las elecciones de 1978 venció el APRA; su líder Haya de la Torre presidió la Cámara que elaboró una nueva Constitución. En las elecciones de 1980 triunfó Balaúnde Terry, que llevó a cabo una política antirreformista. Durante su mandato prosiguió la inestabilidad económica y apareció el grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Sin embargo, la experiencia guerrillera de los años 60 fue muy corta y fueron rápidamente derrotadas y las reformas sociales, en especial la reforma agraria debilitó sus argumentos²⁶. Las principales guerrillas fueron el Frente de Izquierda Revolucionario (FIR) de orientación trotskista, 1961-1963, el Ejército de Liberación Nacional, (ELN), castro-guevarista, 1962-1965; el Movimiento de Izquierda Revolucionario, (MIR), 1962-1965, uno de cuyos reductos luego se agruparía en el Movimiento Revolucionario “Tupac Amaruc” (MRTA). Hubo también guerrillas locales en Jauja y Ayacucho en 1965. Además de la represión militar, desde 1962, pero ninguna de ellas logró consolidarse, hasta 1980 cuando el Partido Comunista Peruano, de orientación maoísta y singular

estructura y simbolismos radicales, irrumpió en Ayacucho.

La coincidencia del surgimiento de Sendero Luminoso con la cresta de la ola del mercado coquero de los ochenta no es accidental. Para su expansión contó con un campesinado pobre para reclutar y un medio rico a quien imponer tributos, sino su enrolamiento directo en las zonas de producción, con usufructo de armas y dinero proveniente de los asentamientos recientes del Valle de Huallaga y en la Amazonia, causando un doble efecto: los sembrados de coca fortalecían la presencia del senderismo y la presencia de la organización contribuía a la expansión del cultivo.

Pero, a su vez los métodos terroríficos y de control y de impuestos sobre la producción campesina e indígena sumado al apoyo de los traficantes que entraban en contradicción con los milicianos, agrandaba las “rondas campesinas”, creando una espiral de violencia que elevó hasta cifras nunca vistas la violencia, las masacres, el número de muertes y de desplazados por los senderistas, las rondas y las acciones brutales e indiscriminadas de las fuerzas armadas, que en sus torpes estrategias de contrainsurgencia terminaba de completar el cuadro de la sin salida de la población no combatiente. Además, el Perú se llenó de mercenarios y asesores de diversas nacionalidades, pilotos nicaragüenses para el manejo de los helicópteros rusos, y veteranos argentinos de la guerra de las Malvinas²⁷ que aumentaron las atrocidades

26 PEREYRA, Daniel. Del Moncada a Chiapas. p. 99 y ss. TAPIA, Carlos. Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, dos estrategias y un final. Lima, IEP, 1997. p.23, ss.

27 DE GREGORI, Carlos I. Cosechando tempestades: Las Rondas campesinas y la Derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho. En: DE GREGORI, C.I. y otros, Las Rondas. Op cit. p. 211.

de la guerra, demostrando la existencia del mercado de “servicios” mercenarios, otro de los circuitos colaterales importantes a estudiar en América Latina²⁸.

Paradójicamente, mientras los comités de defensa civil o rondas campesinas le infringían a Sendero Luminoso los golpes que las fuerzas armadas no pudieron darle por su equivocada estrategia militar de “guerra genocida” adoptada en el comienzo, por tropas que usualmente no hablaban quechua y que creían erróneamente que el silencio y el miedo eran lealtad al enemigo, Sendero Luminoso no crecía sino en las barriadas de Lima y en las zonas cocaleras.

Antes de la expansión de la coca y de Sendero Luminoso Perú era sin duda productor de coca y cocaína pero sus plantaciones tradicionales estaban localizadas en unas pocas poblaciones de la sierra. Una vez el aumento de la demanda se hizo manifiesto el cultivo y la producción se expandió por más de diez departamentos, siendo la más alta concentración en el Alto Huayaga. En 1985 los expertos calculan el área total sembrada en 150.000 hectáreas y todos los cálculos señalan un incremento de las áreas a partir de 1983. En 1992 se calcula que el área asciende a 257.000 hectáreas, además se estima un aumento de la productividad por hectárea a partir de

1985 por introducción de nuevas tecnologías y especies que producen mayor foliación o concentración del alcaloide por arroba o quintal de hoja²⁹. Lo cierto es que la coca llegó a constituir en los 80 entre el 8% y el 11% del PIB peruano aunque en 1992 había descendido a 2%³⁰. Pero, donde mejor se nota el tamaño de la economía cocalera en el país andino es en el sector externo donde alcanzó al 16% de las exportaciones legales en 1980 mientras que en 1985-1986 la participación fue del 26%, descendiendo en 1995 al 6%.

Este descenso de la economía cocalera, en parte muy seguramente tuvo que ver con el debilitamiento del movimiento guerrillero y de la intensidad de la guerra, de la misma forma como el auge se podría asociar con su expansión. Sin embargo, pasará mucho tiempo para que las heridas de la guerra cicatricen y los también frecuentes excesos de las rondas campesinas que continúan tomando la justicia por su propia mano y ejerciendo una violencia excesiva contra abigeos o reductos o supuestos simpatizantes de los senderistas, o simplemente personas extrañas en la región, muchas veces turistas, aventureros extraviados, periodistas o simplemente chivos expiatorios, es otra forma de contra violencia desbocada que demuestra que la inercia de la guerra no termina, así oficialmente ella haya culminado en 1996.

28 UNITED NATIONS. Experts Meeting “Traditional and new forms of Mercenary Activities as a means of violating Human Rights and impeding the exercise of the rights peoples to self-determination”, Geneve, 2001. Allí se presentó, por parte del autor, un estado del arte sobre Colombia y América Latina, en el que se evidenció la carencia de estudios y la urgente necesidad de que el tema sea abordado por expertos desde diferentes países.

29 THOUMI, p.192.

30 Ibidem, p. 193.

En contraste con Colombia, la guerra peruana fue relativamente corta, se desarrolló entre 1980 y 1996, con mayor intensidad en las provincias donde se hizo fuerte, con diversas etapas pero los senderistas indudablemente habían sido derrotados en 1996, (así algunas noticias de prensa hablen de un eventual resurgimiento en los últimos dos años). Y su derrota sobrevino, no tanto por una inteligente estrategia del Estado Peruano, sino por una convergencia de circunstancias y por un enemigo espontáneo e inesperado que ellos mismos engendraron con su brutalidad hacia las comunidades: el pueblo que ellos decían defender y sus “rondas”. Pero la diferencia con la Colombia del 2002 radica en que el crecimiento de la producción cocalera benefició el crecimiento y la expansión de Sendero Luminoso y luego su descenso pareciera que estuviera ligado al éxito de las medidas de erradicación de los cultivos donde el Estado Peruano tuvo cuidado de no otorgarle apoyo campesino con fumigaciones masivas y que los programas de erradicación no se constituyeran en ventaja de corto o largo plazo, error fundamental en la estrategia colombiana. Eso impidió que la balanza de los recursos del narcotráfico se fuera directamente a favor de la insurgencia armada.

Tal vez la razón más importante se deba a que su organización no alcanzó a articularse al juego de mercados y oportunidades creados por la economía ilegal, y sus beneficios fueron indirectos, mientras que en el caso colombiano la guerrilla de las FARC controla importantes zonas de producción, tanto de cocaína como de amapola, protege laboratorios e

incluso se le acusa de tener su propia cadena de producción y exportación a cambio de armas y pertrechos. Las autoridades policiales han acusado a uno de los comandantes, Tomás Medina Caracas, conocido como “el Negro Acacio”, comandante del 16 frente en la frontera con Brasil en el departamento del Vichada, de ser directo productor y exportador y en los territorios controlados por él, fue capturado y extraditado el capo brasilero “Fernandiño”.

Mientras en el caso colombiano el narcotráfico ha otorgado recursos ilimitados a las FARC, especialmente después de 1995, en el caso de Sendero Luminoso las cosas no parecen tan claras si se toman algunos indicadores. Los mismos analistas militares se sorprenden de la pobreza del parque militar con que contaba, la variedad de armas y sus dificultades para el suministro de municiones en todas las regiones, con excepción de Huayaga, donde el evidente mercado de armas del narcotráfico era mayor³¹. Sus fundamentalismos políticos y su estilo de acumulación de fuerza dentro de una ortodoxa maoísta casi religiosa, impuso la práctica romántica de la “recuperación de las armas del enemigo” por medio de asaltos a cuarteles o puestos policiales o en asesinatos selectivos para “elevar la moral revolucionaria”.

La mayoría de los analistas coinciden en que los factores del éxito militar del gobierno de Fujimori se desataron cuando Sendero Luminoso decidió hacer campañas urbanas, especialmente en Lima, después de 1991; antes en los primeros años había hecho, fundamentalmente, atentados dinamiteros y acciones de propaganda. En

31 TAPIA. p. 115-116.

los ochenta el crecimiento se dio en las universidades y en algunas barriadas en el cono este de Lima, registrando en total 162 acciones terroristas en el país, solamente 6 en el área urbana capitalina, ya que los organismos de Lima fueron desmantelados cuatro veces. Con el lanzamiento de una ofensiva en las ciudades y con el objeto de “alcanzar el equilibrio estratégico” en el campo, atacando caseríos ante la presión de las Fuerzas Armadas y de las “rondas” y urbanizando la guerra con una organización precaria.

Entre 1991 y 1992 la ofensiva terrorista fue muy fuerte en la capital y muchos sectores sociales veían como incontrolable el avance de Sendero Luminoso. Hizo explotar 46 carros bomba y solo en 1991 perpetró 900 atentados con más de 400 muertos. En 1992 el número fue similar y los muertos 350. El crecimiento militar era innegable, pero la rentabilidad política del terrorismo es decreciente. Inicialmente creó un gran impacto y sensación de crecimiento e irreversibilidad. Solamente en abril y mayo de 1992 uno de sus organismos en Lima reportó más de 100 “aniquilamientos selectivos”. Pero la reacción popular se despertó cuando el 14 de febrero de 1992 asesinó a una líder cívica femenina, quien encabezó una marcha civil contra un paro armado decretado el día anterior que generó un sentimiento nacional de repudio y que dio comienzo al declive de cualquier forma de apoyo popular por miedo o simpatía incluso a nivel internacional. El perfeccionamiento de la inteligencia, el adecuado manejo de la información, el viraje en las acciones de la fuerza pública de las acciones masivas a las selectivas, el estudio paciente de las zonas de operaciones llevaron a las fuerzas de inteligencia a producir importantes bajas y capturas, que proporcionaron

las pistas y la información necesaria para llegar al organismo mismo de comando y al mismo “presidente Gonzalo”, el profesor de filosofía de la Universidad de Ayacucho, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. En medio de una lluvia de terror sobre Lima, en pocos meses se capturó a toda la cúpula de la organización.

Pero, el efecto “boomerang” no se dio únicamente en Lima; se dio, principalmente, en el campo donde los impuestos y el uso del terror sobre las comunidades campesinas aumentaron a partir de 1989-90 las rondas campesinas y los Comités de Defensa Civil, por encima y a pesar de los cada vez menos frecuentes errores de las Fuerzas Armadas, que poco a poco ganaron apoyo de la población con acciones cívicas. La inesperada emergencia de un vasto movimiento social campesino, espontáneo pero oportunamente aprovechado por las guarniciones que supieron respetar su lógica comunal y muchas veces su lenguaje antiestatal, hizo que en 1990 existieran más de 1000 organizaciones comunales, algunas con armas de las guarniciones militares, otras con apoyo de pequeños narcos locales en las zonas de cultivo. Pero sobre todo, un cambio integral de estrategia estatal.

Inteligencia “inteligente” es decir, en manos del gobierno civil y al servicio de las acciones judiciales, reconstrucción del respeto y apoyo de la población. Todas estas estrategias son apenas obvias e “ingenuamente normales” en cualquier guerra de guerrillas, de largo aliento, donde la experiencia muestra que gana el bando que gane a la población, es decir, que sea más legítimo. Así se cumple una ley de la guerra desde tiempos inmemoriales: más que destrezas militares, que son indispensables por definición, se requieren destrezas políticas

que siempre están más allá, por encima de las estrategias de combate. Son ante todo posturas éticas y políticas las que derrotan a los enemigos. Lo militar sirve para ganar batallas y lo político para sostener el triunfo, es decir, para ganar la guerra.

Por eso fue definitiva la estrategia frente al narcotráfico, aún en contravía de orientaciones estadounidenses en pro de la fumigación masiva que no erradica sino que hace migrantes los cultivos y constituye de cualquier forma un bombardeo a la población. Estrategias de erradicación manual concertada que genera empleo, crea consenso y quita oxígeno a la hoguera, estrategia antagónica a la del país que más ha fumigado cultivos ilícitos en las historias, y donde más han aumentado y en directa correlación junto con el aumento de la cobertura de las guerrillas, sin que el narcotráfico sea el único factor de esta compleja realidad y sin querer simplificar el problema.

EL STATU QUO DE LA VIOLENCIA

Pero los mercados de violencia no terminan con la guerra. Esta historia parece fácil y lineal si la dejáramos allí. Uno de los bandos triunfó y todo quedaría maniqueo y rosa si no miramos las profundas transformaciones que la guerra dejó en el Estado y la sociedad peruana. Sendero Luminoso no es la única fuerza derrotada en esta guerra: la guerra creó un statu quo de violencia en las fuerzas armadas, en el gobierno y en muchos sectores de la sociedad que encontraron altamente rentable el estado de guerra permanente. El estado de guerra permite algunos beneficios colaterales: el presidente Fujimori, y su pequeña cúpula político-militar, –sagazmente y en opinión de importantes analistas, sin

que eso le diera grandes ventajas en la lucha antisubversiva, pero si en la construcción de una hegemonía única por parte de su movimiento– acumularon un gran capital político que “gastó” en una reforma del régimen. El control frontal y antidemocrático de la oposición, la permanente violación de los derechos humanos, ya no en la forma como se hizo en los ochenta, sino de manera selectiva y secreta, el control y monopolio de los medios de comunicación, entre otros rasgos autoritarios, llevó al debilitamiento de los mecanismos de control, lo cual trajo como consecuencia el establecimiento de importantes estrategias de corrupción, tráfico de armas y de narcótico. Inclusive apeló al expediente de la guerra internacional contra otro país latinoamericano, Ecuador y quiso sacar partido de la guerra colombiana. Por eso el epílogo de uno de los regímenes bandera del neo-autoritarismo que se impuso en los noventa en América Latina y que tiende a ser reproducido en Colombia como panacea, no solo se reeligió con métodos antidemocráticos y arrasando con el Estado de Derecho y con las formas democráticas, sino que se quiso perpetuar en un tercer periodo, con todo tipo de maniobras y fraudes, pero terminó perdiendo la guerra, hundido en el tráfico de armas hacia las FARC en Colombia y favoreciendo todo tipo de negocios ilegales articulándose un gobierno mafioso.

La sociedad peruana y su camino hacia la democracia perdieron la guerra política en la cúpula. De otra parte, en muchas regiones como Ayacucho, la guerra proporcionó otra ventaja:

“Gracias al financiamiento del narcotráfico la región quedó “libre” no solo de subversivos” [con el financiamiento de las rondas y

comités de defensa civil-CDC] sino también de policías y en cierta medida de militares. Desde 1988 la administración política y el control militar del valle se encuentran en manos de los CDC. Nacidos como estrategia de sobrevivencia en la guerra, al conquistar cierta tranquilidad pasan a cumplir otras funciones de carácter social y de gobierno. Frente a la violencia subversiva y las arbitrariedades de las fuerzas contrainsurgentes, con un Estado ausente y ajeno a sus demandas se construye desde la población civil una opción capaz de hacerse un lugar entre las fuerzas en conflicto”³².

COLOMBIA: LOS FACTORES ESTRUCTURALES

En el caso colombiano –que es muy estudiado, conocido y vivido por nuestros lectores no vamos a ser muy extensos, sino a señalar unos rasgos generales– los mercados de violencia se consolidaron mucho más fuertemente hasta conformar el más sólido sistema de economía de guerra del continente americano por las siguientes razones:

1. la existencia de amplios territorios secularmente sin presencia estatal y dominados por poderes privados o para-estados: **las regiones de exclusión.**
2. no solamente el surgimiento sino la consolidación desde los años sesenta de varias guerrillas que se estable-

cieron en los territorios de colonización estableciendo su “propio orden”, contra-estatal gestando situaciones de inseguridad para los terratenientes, las empresas agroindustriales, mineras y petroleras.

3. la creciente articulación de las guerrillas al mercado del secuestro y la extorsión
4. el creciente y cada vez más complejo entreveramiento de los grupos guerrilleros con los mercados ilegales y especialmente con las redes nacionales e internacionales del narcotráfico.
5. la presencia de un complejo sistema de economías ilegales que por décadas ejercieron poderes locales, como en el caso de los esmeralderos, que se aliaron con la clase política, con la policía y el ejército, generando un gran mercado de violencia que se articuló a otros mercados ilegales con el beneplácito del Estado.
6. el florecimiento de negocios ilegales y de estructuras de oportunidades ligadas al mercado de tierras como forma de inversión y legalización de capitales y de venta de servicios de seguridad y de justicia por parte de terratenientes privados que generan su propio orden “paraestatal”.

LAS REGIONES DE EXCLUSIÓN

Colombia no es muy distinto de los demás países de América Latina. Geográficamente, está incrustada en el ecosistema de la selva Amazónica y es el único país

32 DEL PINO, Ponciano. “Tiempos de Guerra y de Dioses” En: **De Gregori y Otros. Las Rondas Campesinas y la derrota...**

suramericano que tiene costas en el Caribe y el Pacífico. Su territorio está cruzado de sur a norte por tres cordilleras, del macizo de los Andes, por cuyos valles corre un sistema de ríos y cuerpos de agua que lo hacen uno de los más ricos en biodiversidad del planeta. Esta compleja variedad de paisajes y territorios ha sido uno de los principales obstáculos para que el Estado ejerza un control sobre la totalidad de sus regiones. En algunos de esos territorios –muchas veces de difícil acceso o de relativo aislamiento– se han implantado poderes locales articulados a economías ilegales que han dado origen a fenómenos continuados de criminalidad organizada, conformando núcleos de regionales de violencia que podríamos llamar “endémica”.

Estas *violencias regionales* tienen un componente histórico de larga duración. El proceso de formación del Estado-Nación desde la conquista española no logró la dominación de amplios territorios por razones de acceso geográfico o por resistencias de las etnias nativas, y que por esas condiciones tuvieron débiles comunicaciones con los centros político administrativos y durante siglos se convirtieron en “territorios de exclusión”. Dichas regiones fueron secularmente marginadas del desarrollo. Generalmente se trata de zonas

selváticas que, a diferencia de las zonas dominadas por el gobierno colonial, el proceso de mestizaje y evangelización fue lento o nulo. La República, fundada en 1819, no cambió sustancialmente esta forma de vinculación con dichos territorios que abarcan amplias regiones de la Costa Pacífica, el ecosistema de los ríos Orinoco y Amazonas, extensos territorios del sur oriente, y los valles interandinos de los principales ríos como el Atrato, el San Juan, el Cauca y especialmente el Magdalena que atraviesa el país de sur a norte y alberga un extenso territorio interior. Esto permitió la existencia de verdaderos “ghettos” de ausencia de la jurisdicción de la ley y de autoridad estatal, que con el desarrollo del capitalismo se transformaron en territorios de economías ilegales como el contrabando o la explotación de las riquezas naturales, al lado de las cuales la violencia se convirtió en el mecanismo de regulación social por excelencia. Allí surgieron poderes paralelos y en el siglo XX dieron origen a empresas continuadas de criminalidad organizada o a refugio de las diferentes expresiones de insurgencia armada contra el orden establecido, o ambos simultáneamente, albergando allí “otro orden”³³ distinto al del monopolio estatal de la violencia y de la justicia³⁴.

33 Un orden político es entendido como la organización de la vida social en torno a unas estructuras de poder, unos valores, unas normas y unas prácticas comúnmente aceptadas o impuestas por un poder que las regula. “vale la pena aclarar ...que el orden no tiene por qué ser justo ni bueno. Es un conjunto de regularidades, de normas, que sin duda permite que unos se beneficien más que otros, que unos manden y otros obedezcan, pero lo que importa es que es vivido y reproducido *como orden*. No es un ideal, es un hecho”. ESCALANTE, Fernando. Ciudadanos Imaginarios. México, El Colegio de México, 1992. p. 45.

34 Al respecto es sugerente el artículo de BOLÍVAR, Ingrid. Ver nota N° 39.

MERCADOS DE VIOLENCIA AGRARIA, "ESPACIOS CULTURALES PARA EL DELITO" Y LA ESTRUCTURACIÓN DE UN "ORDEN"

Otra característica específica del caso colombiano y no del peruano es que además de los macro-territorios de violencia o "regiones de exclusión", la tierra es otra mercancía más que forma parte de los tráficós del mercado de violencia. En Colombia existe hasta hoy, una inmensa frontera agraria abierta a la colonización de pequeños campesinos parcelarios, expuestos a un mundo de violencias por la ausencia reguladora del Estado. En estas regiones desde hace por lo menos dos siglos se da un ciclo caracterizado por la apertura de tierras "baldías" o sin titular, en las que generalmente vivían comunidades indígenas, las cuales eran colonizadas por familias de campesinos libres que tumbaban o quemaban la selva, preparaban sembreras y criaban algunos animales. Una vez la tierra se había valorizado por el trabajo campesino venía la presión del terrateniente, mediante varias estrategias, para apropiarse de la tierra o para obtener la fuerza de trabajo a bajo costo, sin pago de salarios, o mediante mecanismos violentos, generando nuevos conflictos en los que las autoridades estatales o no intervenían o usualmente se ponían del lado del terrateniente, muchas veces titulándole las tierras recientemente incorporadas y, de paso, expropiando por esta vía al campesino. Este, entonces, se veía abocado a resistir mediante violencias defensivas o caminar selva adentro para abrir nuevas tierras, repitiendo el ciclo, generación tras generación, con grandes costos ecológicos para los sistemas naturales de selva. Entre tanto las tierras incorporadas eran y son dedicadas a una ganadería

extensiva, improductiva, pues en la mayoría de los casos emplea extensiones de una o más hectáreas de pastos en una sola res, sin mayor cuidado e inversión, generando muy pocas plazas de empleo de mano de obra.

Este modelo ganadero es el predominante en el mundo rural, con grandes extensiones arrancadas a las selvas por el mecanismo descrito, administrado por una clase social insensible ante la miseria y proclive a métodos violentos para la defensa de sus intereses. Modelo que sobrevive al lado de la pequeña producción parcelaria, dominada por el gamonalismo local. Así, el "modelo" de orden social que ha sido adoptado recientemente por otro tipo de empresarios de la agroindustria que han organizado sus plantaciones de banano o de palma o de otros cultivos tropicales, adoptando las costumbres de los ganaderos.

Luego de la "bonanza" del narcotráfico y de otros negocios como los de los grandes esmeralderos, a partir de los años 80, decíamos, el modelo terrateniente ganadero se ha expandido y la forma como se ha ampliado ha sido través de la compra masiva de tierras –por cuanto la inversión en tierras en zonas de escasa seguridad (debido a la presencia de abigeos o bandas de ladrones de ganado, pero especialmente por la ocurrencia de secuestros y extorsión, práctica común por parte de las guerrillas y de otros grupos delincuenciales), a las que se les devuelven ciertos niveles de seguridad mediante el empleo de grupos de justicia privada– es usual. Este ha sido un negocio muy rentable en la medida en que sus propias bandas armadas proporcionan una valorización a las tierras compradas a menor precio, lo cual permite hablar de una "contra-reforma agraria" por las amplias

extensiones que han sido compradas bajo estos mecanismos³⁵.

“SIN DIOS NI LEY”

Desde la época colonial es frecuente la queja de los gobernantes sobre su incapacidad de atender territorios cercanos o distantes de su jurisdicción donde la mano de los gobernantes no llegaba. Tampoco se lograron incorporar durante la época republicana. Muchos de ellos eran y aún son territorios indígenas, usurpados violentamente por mestizos o colonos pobres en busca de fortuna. Así en muchas de estas zonas “sin Dios ni Ley” se han implantado pequeños o grandes narcotraficantes, u otro tipo de nuevos ricos, por ejemplo, los llamados “esmeralderos”, o mineros cuyas fortunas provenientes del oro o del tráfico de armas, u otros tráficos, ejercen un poder ligado a la propiedad agraria.

A estos factores se suman los que tienen que ver con la estructuración de “la ley”, problema que no es únicamente de las regiones de exclusión sino que allí se acentúan esos rasgos que son “síntomas del malestar de la cultura” y están instaurados en el imaginario de los colombianos, a manera de “ciudadanía imperfecta”.

Algunos autores han hecho énfasis recientemente en la tradición de ilegalidad colombiana para explicar muchos de los fenómenos del narcotráfico y la generalización de la violencia en los años ochenta³⁶. Se podría hablar de la existencia de –como diría Norbert Lechner– “espacios socioculturales para el delito”. Las ventajas comparativas han sido clasificadas en dos grandes grupos: las que tienen que ver con el Estado que se auto asignó gran cantidad de funciones, lo cual lo hizo ineficiente, con altas dosis de corrupción tanto en el ámbito público como privado, manifiesta inoperancia de la legislación, incapacidad, ya mencionada para ejercer el control sobre amplios territorios. Esto hizo que se generalizara la existencia en Colombia de comportamientos “de facto” socialmente aceptados, que en muchos casos priman sobre los “de jure”. Durante muchas décadas es muy común en Colombia la evasión de impuestos, la doble contabilidad en los negocios legales, la subfacturación o la sobrefacturación, según el caso. Esto dio lugar a un segundo grupo de “ventajas comparativas”: la implantación de mercados ilegales y negocios con altas tasas de ganancias y con altos riesgos, que atraen a amplio sectores de población. Ellos incuban altos niveles de violencia endémica,

35 En 1961 se fundó el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria-INCORA, cuya misión era adelantar una redistribución de la tierra mediante compra o titulación. Su labor se redujo en alto porcentaje a la “titulación de baldíos” y el impacto de su acción fue anulada por la nueva concentración que se dio en manos de narcotraficantes y esmeralderos a partir de los años 80.

36 Además de BETANCOURT y GARCÍA, Op. cit. KRAUTTHAUSEN, Ciro. Padrinos y Mercaderes; Crimen Organizado en Italia y Colombia. Bogotá, Espasa Hoy, 1998. p. 125 ss. THOUMI, Francisco. Economía Política y Narcotráfico. Bogotá, Tercer Mundo, 1994. Capítulo 5 y su reciente libro **El Imperio de la Droga**, ya citado.

que a su vez suministra personas arriesgadas y hábiles en actividades armadas, para nuevos negocios y actividades ilegales. Por ejemplo, la existencia de una larga tradición de contrabando de entrada de productos de prohibida importación o la evasión de los impuestos aduaneros y la salida de mercancías de prohibida exportación por canales distintos establecidos por el Estado, tales como ganado en pie, café, azúcar, cemento y el caso especial de las esmeraldas.

La ilegalidad nutre las dinámicas violentas y posibilita la existencia de organizaciones armadas distintas a las del Estado y crea enclaves regionales donde los poderes privados imponen su ley. Según Ernest Gellner no se puede construir un poder central cuando parte de la población tiene posibilidades exitosas de evadirse, de resistirse y de huir al alcance de sus normas y decisiones, puede establecerse en otro lugar y “empezar de nuevo” o se encuentra establecida en lugares tan aislados geográficamente donde es muy costoso ejercer la dominación³⁷. Así las cosas, es fácil entender porqué el Estado colombiano ha ejercido un precario monopolio de la violencia, en la medida en que sus autoridades no tienen un control jurisdiccional sobre todos sus territorios.

EL CASO DE LAS ESMERALDAS Y OTROS TRÁFICOS

Quizás las organizaciones criminales más antiguas tienen que ver con una ancestral

tradicción del contrabando, y en ese campo se inscribe el negocio de la extracción y comercio de esmeraldas. La zona esmeraldífera en el departamento de Boyacá (situado en el centro del país 150 km al noroeste de Bogotá), donde se ubican las minas más importantes y consideradas como las más productivas del mundo en este género de minerales donde desde la segunda mitad del siglo XX se ha instaurado una red de organizaciones que compiten por el control de la producción y comercialización de las gemas. Estas organizaciones muy pronto se convirtieron en protagonistas de acciones de intensos y generalizados actos de violencia, sin que el Estado colombiano haya tenido ni la capacidad, ni la vocación real por controlarlos. Antes, por el contrario, su intervención ha sido traumática, desde tiempos inmemoriales. Así, la región esmeraldífera se transformó en un escenario de poderes donde unos personajes locales se apropiaron paulatinamente de una riqueza natural que pertenece a la Nación pero que el Estado, agobiado por la corrupción y la persistencia de la violencia, se mostró incapaz de administrarla y la entregó en concesión a particulares en un largo proceso gestado durante las administraciones del Presidente Misael Pastrana, (1970-1974), y del Presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978).

La entrega de las minas se hizo luego de un agudo conflicto que se ha conocido como “la primera guerra de las esmeraldas” (1965-1976) que terminó con la adjudicación de las minas favoreciendo a grupos de

37 GELLNER, Ernest. El Arado, la Espada y el Libro: La Estructura de la Historia Humana. México, Fondo de Cultura Económica, 1992. Esta idea aplicada al caso colombiano está desarrollada en: BOLIVAR, Ingrid J. “Sociedad y Estado: la Configuración del Monopolio de la Violencia”. En: Revista Controversia. N° 175, diciembre de 1999. p. 11.

esmeralderos (en su mayoría leales al partido conservador al menos en un principio), tendiendo redes de corrupción manejadas por personajes de la política y parlamentarios de dicho partido sobre los empresarios usufructuarios directos, como expresión de una alianza con sectores del “establecimiento”, con políticos preferentemente del departamento de Boyacá y con sectores del Ejército y la Policía Nacional, que han funcionado desde entonces.

Los políticos protegen que no haya grandes cambios en los contratos de concesión ni en la legislación, los esmeralderos financian sus campañas, la policía se privatiza al servicio de sus intereses inmediatos, el Ejército les garantiza su “autonomía” y su “orden” regional y se apoya en sus recursos armados para la lucha antisubversiva en esa y en otras regiones y todos de alguna forma le prestan, junto con las autoridades judiciales un seguro de impunidad. Pero todos se benefician.

UNA ECONOMÍA AMBIGUA: ENTRE LA ILEGALIDAD Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Desde el punto de vista jurídico el negocio de las esmeraldas se mueve de manera ambigua. Muchos de los productores,

talladores y comerciantes manejan sus negocios con apego a las normas. También es indudable que la etapa en que predominó la producción clandestina e ilegal llegó hasta 1968. Sin embargo el entrelazamiento de algunos de los líderes del negocio con las redes del narcotráfico hizo que muchos de los actores se involucraran con negocios ilegales de tráfico de armas, drogas o de lavado de activos que los involucraron en redes de criminalidad organizada y con otras actividades como el paramilitarismo. La criminalidad organizada funciona en Colombia, como en el resto del mundo, como una red de individuos u organizaciones cuya finalidad es la realización de actividades ilegales permanentes y sostenidas por “asociaciones criminales especiales que se diferencian de otras expresiones de la criminalidad moderna por mantener una fuerte estructura de poder sobre un territorio”³⁸, además de una actividad comercial o productiva sobre productos o mercancías prohibidas. Para la práctica de sus negocios tienden a ejercer una cuasi soberanía territorial y a mantener una autonomía o control con relación a los centros de poder legítimo, tanto en lo económico, como en lo político e institucional. Poseen un aparato de seguridad que ejerce acciones de control o de neutralización sobre la justicia estatal,

38 Hemos retomado y entretendido algunas ideas propias con las de Darío Betancourt Echeverry. Cuando nos referimos a “capos”, “patrones” de mafias u organizaciones de tipo mafioso, hecha la salvedad de la nota N° 18, nos referimos a una *sui generis* forma de relación social que, desde un estricto ámbito sociológico, se asemeja mucho a las formas clásicas gangsteriles italianas o estadounidenses. El caso de los esmeralderos fue asimilado a la modalidad de las mafias sicilianas, de origen rural. BETANCOURT, Darío y GARCÍA, M. L. Contrabandistas, Marimberos y Mafiosos, Historia Social de la Mafia Colombiana. 1965-1992. Bogotá, Tercer Mundo Editores. También BETANCOURT, D. Medidores, Rebuscadores, Traquetos y Narcos. Bogotá, Ed. Antropos, 1998. Especialmente el segundo capítulo.

hace su propia justicia y emplea la violencia de acuerdo a sus intereses, buscando un fin último: la acumulación ligada al ejercicio de un poder. La toma de decisiones es rápida, obedece a la voluntad de un sujeto o de una pequeña cúpula y se ejerce de manera vertical y autoritaria. No se oponen al poder legítimo sino que se incrustan funcionalmente dentro del mismo y entran en coordinación y cooperación con sus agentes, desarrollando en algunos aspectos actividades comunes, especialmente cuando ven factores de perturbación del orden o competencia con otros actores, como en el caso de las guerrillas, o las actividades que pueden afectar sus intereses, (sindicatos, partidos de izquierda, “agitadores sociales” u otros negociantes ilegales que no se someten a sus preceptos y códigos o que a corto o mediano plazo puedan constituir amenaza), en este sentido son “un Estado dentro del Estado”. Esta podría ser la definición más aceptable de la idea de Mafia, en el sentido clásico³⁹.

De alguna forma el mercado de las esmeraldas desde 1968 hacía un tránsito “normal” del mercado ilegal surgido en los años cincuenta a la economía legal mediante concesiones y el libre mercado de exportaciones. Pero el surgimiento de los mercados de armas y la bonanza “marimbera” interferirían en este proceso que se agravó definitivamente desde 1980 con la presencia de organizaciones criminales especialmente las relacionadas con el tráfico de cocaína, presencia que se hizo notoria en todo el

territorio colombiano, afectando no solo a estas sino a muchas de las actividades económicas legales. Era la expresión de numerosas formas ilegales que se desarrollaban en otras regiones y que se expresaban en forma de organizaciones de tipo mafioso, con el control político de esos territorios donde el Estado no podía ejercer su control.

Las investigaciones sobre el narcotráfico, como hemos visto, coinciden en que una de las más importantes “ventajas comparativas” para que en Colombia se afincaran las redes criminales del narcotráfico, radica en la preexistencia de una secular tradición de ilegalidad constituida especialmente por los núcleos del contrabando y el tráfico de esmeraldas. Tienen una característica común: contrabando de exportación con experiencia en la repatriación de capitales y en la legalización o lavado de los activos⁴⁰. La preexistencia de estas economías ilegales exige un contexto histórico más amplio que desarrollaremos a continuación, en dos partes: los factores “coyunturales” y los factores “estructurales” que contribuyeron al encuentro entre ilegalidad, corrupción y violencia.

ILEGALIDAD, CORRUPCIÓN, “ACUMULACIÓN TARDÍA” Y “CAPITAL HUMANO”

La economía de las esmeraldas, su estructura socio-económica y la cultura que construyó alrededor de su explotación y comercialización fue una de las bases

39 GALLEY, B, et autres. Dossier sur “La Grande Criminalité Organisée: Dessous et Enejux” En: Relations Internationales et Stratégiques. N°20, 1995.

40 THOUMI, Francisco. Economía Política y Narcotráfico. Bogotá, Tercer Mundo, 1994. P. 171 ss. BETANCOURT, Darío y GARCIA, M. L. Opcit, cap 2.

fundamentales para la expansión del narcotráfico en los años ochenta. Sus redes financieras fueron la vía por donde se transportó lo que hoy se conoce como el lavado de activos. Sus sistemas de organización social fueron el soporte de una “revolución” en la producción que permitió expandir las áreas de siembra y el capital necesario para la compra de pasta básica para su procesamiento en Bolivia y Perú. Esa industria no podía surgir sin este proceso de “acumulación tardía” que suministró capitales de alto riesgo; tampoco sin el “capital humano” necesario, es decir, sin personas dispuestas a este tipo de aventuras y sin una estructura de hombres armados y trashumantes perfectamente entrenados para ejercer la violencia necesaria que exigía la naturaleza de las nuevas empresas. Las guerras de las esmeraldas fueron el campo de entrenamiento para la abundante y barata mano de obra disponible, que luego se complementó con sus propias huestes formadas principalmente en las barriadas de Medellín, Cali y Bogotá y de muchas otras regiones, con la acentuada y prolongada crisis social. Personas dispuestas a jugarse la vida por unos cuantos dólares como cocaleros, “mulas”, “cocineros” o laboratoristas, sicarios, guardaespaldas, pistoleros, etc. Tampoco podía surgir sin los soportes dentro del establecimiento, que ya estaban contruidos por la corrupción creada por los grandes y pequeños esmeralderos.

Ese fue el aporte de un personaje esmeraldero, Isauro Murcia, el triunfador de la primera guerra de las esmeraldas, el primer hombre que pasó de “zar de las esmeraldas” a ser el “primer rey de la cocaína”. Gonzalo Rodríguez Gacha se incrustó en una empresa que ya estaba montada y se encontró, junto con sus socios

de Medellín, con una gran oportunidad: la guerra centroamericana, los negocios del asunto “Irán-Contra” y sus reflejos en la guerra de contrainsurgencia colombiana. Sin embargo, también se encontró con un gran obstáculo: su obsesión imperial de apoderarse del negocio de los que fueron sus “patrones” en su juventud, que también habían crecido en poder y en riqueza y su también obsesiva guerra contra las FARC, que lo llevó a declararle la guerra a la Unión Patriótica, (partido creado por las izquierdas afectas al Partido Comunista con miras al proceso de paz iniciado en 1984) y a toda manifestación de izquierda, azuzado y utilizado por los sectores del establecimiento incómodos con el proceso de paz de Betancurt (1982-86) y con los espacios ganados por las guerrillas y la izquierda.

¿Qué papel cumplían los grandes esmeralderos dentro de esa estrategia? Las esmeraldas son un engranaje de una sociedad ilegal primero, luego legal desde hace tres décadas, que se articuló tempranamente con las economías ilegales de las armas y las drogas. Nuestra hipótesis es que el dinero de las esmeraldas habría financiado y revolucionado la expansión de la coca y que probablemente fue el principal factor interno que favoreció su difusión. Unos y otros luego se insertaron en el experimento de contrainsurgencia que muy seguramente engendró a los mal llamados “carteles de la droga” y que sobredimensionó internamente el poder de estos personajes y de sus grupos, contribuyendo a industrializar la producción de cocaína. En este proceso de expansión las mafias de diferente naturaleza, (principalmente del contrabando, de armas, oro, esmeraldas, marihuana, cocaína y amapola) penetraron y desnaturalizaron por dentro a la policía, al ejército, a la justicia, es decir, contri-

buyeron, y de qué manera, a deteriorar la legitimidad del Estado colombiano y luego aterrorizaron a la sociedad cuando las alianzas no funcionaron. Aunque los esmeralderos, hay que decirlo, nunca se han enfrentado al establecimiento, por el contrario sus acciones han sido en favor de los intereses de las elites económicas y políticas, cuidando siempre su relación con los políticos y gobernantes que pueden variar las reglas del juego de las concesiones y por lo tanto afectar el margen de ganancias y su control sobre esta industria.

La necesidad de formar un aparato armado para implantar su propio orden en las minas adjudicadas con el beneplácito del Estado, fundó un “modelo” de control territorial, que al lado de sus masivas compras de tierra y al crecimiento de las FARC en sus territorios, los llevó a la aventura de participar en un experimento paramilitar sin precedentes en nuestra guerra interior, alimentando la guerra interna con mercenarios internacionales, formados en las principales guerras del mundo y depositarios de tecnologías bélicas que ni siquiera el Estado manejaba. Pero esto no es privativo de los esmeralderos. También lo han hecho las multinacionales del petróleo, del carbón, de la agroindustria y de otros minerales y especialmente los sectores de la agroindustria y la ganadería⁴¹.

Para poner un ejemplo, a personas asociadas al negocio de las esmeraldas se les atribuyen en los últimos diez años compras

de tierras en ocho departamentos y propiedades por medio de terceras personas, por cientos de miles de hectáreas. En forma similar, en un proceso que totaliza millones de hectáreas, los narcos y esmeralderos, además de las tierras, compraron los conflictos agrarios y territorios que albergaban guerras regionales y se involucraron como actores de una creciente guerra rural en regiones estratégicas del país⁴². Pero especialmente en las regiones donde se presentaban bonanzas económicas por la explotación de recursos naturales, por modernas explotaciones agroindustriales o por narcocultivos.

CONCLUSIÓN

Muchas conclusiones se pueden sacar de estas historias. Vamos a resaltar solo dos puntos:

1. A las guerras civiles latinoamericanas de las dos décadas finales del siglo XX y especialmente las dos suramericanas de Perú y Colombia en los 90 se han articulado mercados ilegales mercados de violencia, que se han transformado en “nuevos factores estructurales” que alimentan los círculos viciosos de la guerra y de las violencias “endémicas”. Pero si algo puede deducirse de este panorama, es el papel activo y dinamizador que dio comienzo a este círculo infernal entre economías ilegales y mercados de violencia: que el monopolio colombiano de la cocaína llamado “carteles de la droga”

41 Varios Autores. Los Comandos de la Guerra. Bogotá Ed. Oveja Negra, 1991

42 REYES Alejandro. “La Compra de Tierras Rurales por Narcotraficantes en Colombia”. En: Revista Apuntes del Cenes, Separata No.4, 1996, p369 ss. Forma parte de Geografía de la Violencia. Proyecto de Investigación, IEPRI, informes de investigación, Inéditos.

fue en buena parte formado por los actores de la guerra centroamericana con el apoyo de la potencia que ha conducido la fracasada “guerra contra las drogas”, en el contexto de la segunda oleada de la Guerra Fría y que los efectos del escándalo Irán-Contra aún no han terminado. Pero ello no lo explica todo. Tanto Perú como Colombia tienen en su propia historia los factores estructurales que pueden explicar sus propias guerras. Y eso es una ventaja por que son sus sociedades.

2. De alguna forma –aunque nadie puede predecir el futuro– así el Estado Peruano se declare vencedor, existe el espacio donde podría surgir un Estado comunal o un poder gamonal donde renazca la violencia. O, como en Colombia, un “Para-Estado Mafioso”, como ha surgido en Urabá de Carlos Castaño y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), –no en vano los CDC peruanos hoy se llaman auto-defensas– o el para-Estado de narcotraficantes y ganaderos del Magdalena Medio, o el para-Estado de los esmeralderos en el Occidente de Boyacá, en las concesiones estatales de las minas de esmeraldas más productivas del mundo, que en Colombia y en otras guerras irregulares se denominan

“paramilitares” o “ejércitos de justicia privada” o en otras guerras, simplemente fuerzas mercenarias, que terminan reiniciando nuevos ciclos de violencia.

3. O los Estados latinoamericanos recuperan el monopolio de la fuerza, de las armas y de la justicia, legitiman sus instituciones especialmente por mecanismos de democracia, inclusión, participación y transparencia y aceleran el camino de la “modernidad democrática” o quedaremos atrapados en las redes pragmáticas de “modernismos selectivos” o formas autoritarias que los historiadores del fascismo han denominado “modernismo reaccionario”, una tendencia que atravesó el siglo XX en todo el mundo queriendo aceptar la modernidad de la técnica, los beneficios de la acumulación de capital pero ninguna transformación de las relaciones sociales ni de los mínimos éticos que creó la modernidad democrática⁴³. Y su principal enemigo de esta creación de modernidad son las sociedades y para-estados mafiosos que son propensos a construir estructuras autoritarias, arbitrarias (ilegales) y profundamente violentas. Colombia no es el único ejemplo pero es un caso paradigmático.

43 HERF, Jeffrey. El Modernismo Reaccionario. Tecnología, Cultura y Política en Weimar y el Tercer Reich. México, FCE, 1990.